

La transición italiana

La historia reciente de Europa, desde la posguerra a la fecha, registra pocos procesos de transición desde un régimen democrático a otro régimen democrático. El ejemplo más característico de este tipo de transiciones está representado por el largo proceso de discusión política que dio lugar a la V República Francesa en 1958.

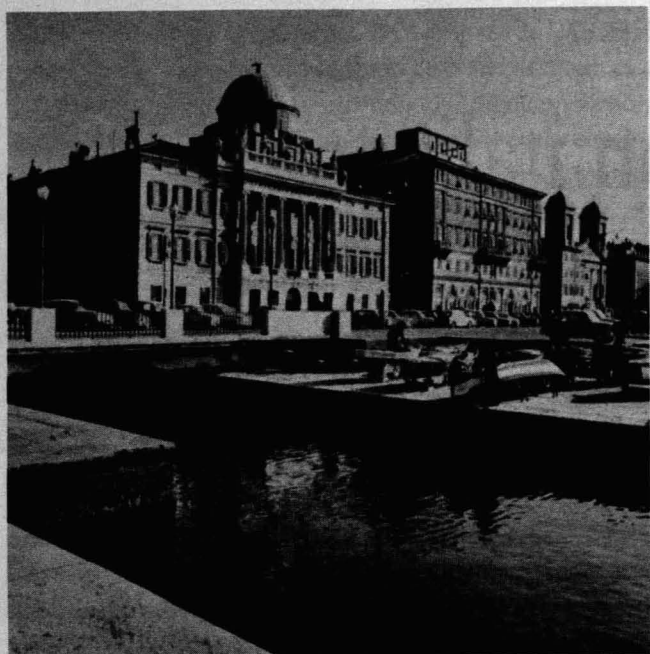
Al igual que en la Francia de los cincuenta, la Italia de los noventa parece estar viviendo un verdadero proceso de transformación en sus estructuras de autoridad, normas y valores democráticos; es decir, en los componentes de su régimen político. Después del referéndum de abril de 1993, que estipula un cambio en el sistema de representación parlamentaria existente hasta ahora, ya no cabe duda al respecto: Italia se encamina hacia la II República, y con ello hacia la instauración de un nuevo ordenamiento institucional democrático.

En el origen de todo proceso de transición existe una etapa más o menos larga de crisis política. El caso de Italia no es la excepción. La crisis italiana ha estado marcada por un creciente rechazo por parte de la comunidad política a las formas tradicionales del ejercicio del poder. Desde la posguerra, Italia adoptó un modelo institucional parlamentario de representación proporcional que en la práctica degeneró en una "partitocracia". Las coaliciones de partidos, con la Democracia Cristiana a la cabeza, que desde entonces han formado gobierno, se han caracterizado por su heterogeneidad interna y por una serie de compromisos y vínculos interpartidistas no siempre consistentes y estables. Ciertamente, el sistema de representación proporcional ha sido la vía para que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se haya conservado en el poder, pero también ha sido la base de su fragilidad. En efecto, la predominancia de este partido desde 1948 ha sido posible gracias al compromiso que se vio obligado a adoptar con partidos ideológicamente poco afines como el Partido Socialista Italiano (PSI). Esta circunstancia ha dado lugar a una continua lucha por obtener mayores cotos de poder entre los partidos que han formado los gobiernos de la posguerra, lo cual se ha traducido en una permanente inestabilidad e ineficacia decisional.

A lo anterior deben sumarse los elevados niveles de corrupción que afectan a todos los ámbitos de la burocracia y

el gobierno, así como los nexos hoy bastante evidentes entre este último y el segundo poder en Italia, es decir, la mafia. Cuando el poder judicial en Italia asumió la responsabilidad en 1991 de castigar los actos de corrupción en las altas esferas del poder, más como una estrategia para aparentar una suerte de renovación moral que para terminar de raíz con las anomalías, nadie pensaba que sus consecuencias resultarían tan devastadoras. En menos de un año cayeron importantes figuras políticas, incluyendo seis ministros y los líderes de dos partidos, generando un verdadero caos político. Pareciera que nadie en la política italiana está a salvo, y menos aún los líderes del PDC que han resultado los más vulnerados. Pero el caso más sonado ha sido ni más ni menos que el de Giulio Andreotti, senador vitalicio y ex-primer ministro en siete ocasiones, sobre quien pesa la grave acusación de haber sido el artífice de la creación de una fuerza paramilitar que, entre otras cosas, vigiló en su momento las actividades del Partido Comunista Italiano (PCI) o incluso intimidó a varios de sus miembros. Asimismo, de acuerdo con el testimonio de diversos mafiosos arrepentidos, fenómeno también inédito en Italia, los nexos de Andreotti con la camorra son bastante evidentes. Lo cual no es sino un secreto a voces.

Pero además de la inestabilidad del gobierno y los niveles de corrupción de la clase política, la crisis política italiana se pone de manifiesto por la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, incluyendo al Partido Democrático de la Izquierda (PDI), heredero del PCI. En efecto, de acuerdo con los procesos electorales más recientes en el tiempo, los partidos políticos experimentan un gradual divorcio con la sociedad. Las tendencias electorales no sólo muestran un creciente abstencionismo, sino también el poco poder de convocatoria que conservan los partidos tradicionales. Por una parte, todos los partidos sin excepción han visto disminuidos sus recursos electorales (el PDC y el PSI, por ejemplo, son castigados en 1992 con una reducción del orden del diez por ciento) y, por la otra, han aparecido en la contienda electoral, sobre todo a nivel regional, una serie de agrupaciones políticas que se autodefinen apartidistas y que adoptan estrategias permanentes de acercamiento con las organizaciones sociales existentes. El caso más carac-



terístico de este tipo de agrupaciones es la Liga Lombarda, que en las elecciones generales de abril de 1992 alcanzó un importante porcentaje de votos que sorprendió a varios analistas políticos. El hecho adquiere aún mayor significación si se considera que la creciente presencia de esta agrupación se produce en una de las regiones más ricas del país.

Con respecto a la crisis de representatividad de los partidos hay quien afirma que ni con el actual sistema de representación los tres principales partidos italianos, el PDC, el PSI y el PDI, podrían alcanzar el cincuenta por ciento de los sufragios a fin de formar gobierno, en el supuesto de que decidieran sumar sus votos.

Pero el agravamiento de la crisis política también tiene un trasfondo social. En efecto, la sensación de engaño que el destape de la corrupción ha producido en fechas recientes, no es un sentimiento nuevo en los italianos. Desde hace mucho se comparte un malestar generalizado respecto a la clase política. Sin embargo, este descontento no explotó sino hasta que a la consabida corrupción se sumó una total ineficiencia del gobierno, originada sobre todo por la inestabilidad política, para hacer frente incluso a los problemas más apremiantes. Al deterioro político debe añadirse pues un deterioro económico, expresado sobre todo en un creciente desempleo y un incremento de las desigualdades sociales e incluso regionales.

En función de los hechos anteriores, el resultado del referéndum de abril pasado no hizo más que ratificar el profundo deterioro que vive el régimen político italiano. Con una votación favorable de más del ochenta por ciento de los electores, el referéndum obligará, entre otras cosas, a un cambio en el sistema electoral en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados, así como a la supresión del financiamiento estatal de los partidos. Cabe señalar que este referéndum es producto de uno previo que en 1991 puso de manifiesto el interés mayoritario por una reforma institucional profunda. Desde entonces a la fecha, se ha producido

un intenso debate en los círculos políticos y académicos sobre el modelo institucional más adecuado para recobrar la estabilidad y la gobernabilidad. Entre las muchas propuestas generadas entonces destaca la del reconocido politólogo Giovanni Sartori en favor de una tercera vía entre presidencialismo y parlamentarismo, y donde los poderes de gobierno se alternen entre el jefe del ejecutivo y el jefe del Estado. La propuesta de Sartori no tuvo mayores repercusiones prácticas, pero fue la que de manera central perfiló el debate ulterior sobre la reforma institucional.

A nivel político, no es difícil reconocer a los actores más comprometidos o identificados con la reforma institucional por favorecer a sus intereses. En primer lugar, para la gran industria, que aspira a ser competitiva en el nuevo mercado europeo, un cambio institucional es necesario pues no se ve favorecida con las formas tradicionales, clientelistas y corruptas, de hacer política. Por su parte, la reforma institucional favorece sobre todo a los partidos grandes que pueden aspirar a obtener la mayoría en el Parlamento aún perdiendo votos, pues lo que contará ahora es la mayoría simple. Ello no debe hacer pensar, sin embargo, que el referéndum constituye un triunfo social de tales partidos.

Respecto del futuro de la reforma institucional en Italia cabe todo tipo de pronósticos. Hay quien asegura por ejemplo que la Liga Lombarda puede constituirse gradualmente en una fuerza mayoritaria. Otros aseguran que el PDI se consolidará como segunda fuerza electoral del país. Otros, por último, señalan que el gobierno estaría formado, mediante distintas combinaciones posibles, por la Liga, el PDI y el PDC, con presencia significativa de partidos regionales en elecciones locales. En todo caso, se coincide en que al concentrarse la lucha electoral en unos pocos partidos la actividad del gobierno se depurará y podrá recuperar gradualmente la estabilidad y la legitimidad que se requieren. Al menos este es el significado profundo que se pretende con la reforma institucional.

Ciertamente, el éxito inmediato de la reforma institucional no está garantizado, sobre todo considerando la permanencia de muchos de los males endémicos de la vida italiana o de los así llamados poderes ocultos, como la corrupción y la mafia, respectivamente. Pero el camino que se ha abierto hoy hace albergar algún optimismo.

Sin duda alguna Italia está en presencia de un proceso de transición. Los valores en favor de una nueva democracia por parte de la sociedad italiana terminaron por vulnerar a la propia clase política. Por su parte, con el resultado del referéndum deberá modificarse la propia normatividad constitucional vigente en materia electoral. Finalmente, se vislumbra un cambio efectivo en las estructuras de autoridad, pero sobre todo en la conformación y competencias del Parlamento y del ejecutivo. Lo que está en discusión ahora son las modalidades de la instauración del nuevo ordenamiento institucional y sobre todo los tiempos en que deberá culminarse. Lo que está en juego en última instancia es la propia democracia. ◇